



Expediente Nº: E/00807/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante la entidad **PROPON COCHERAS 2000, S.L.** en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. **A.A.A.** y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de noviembre de 2011 tiene entrada en esta Agencia escrito del denunciante comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por la existencia de cámaras de videovigilancia cuyo titular es la entidad **PROPON COCHERAS 2000, S.L.** (en adelante el denunciado) instaladas en el **GARAJE (PLANTA -2) (C/.....1)- GRANADA**, con carteles de zona videovigilada en los que no figura el responsable ni dirección para el ejercicio de los derechos, enfocando hacia zonas comunes.

Se adjuntan fotografías de las cámaras y carteles.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización de las actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

Con fecha 17/2/2012 se solicita información a los denunciados identificados por el denunciante no recibándose respuesta.

Con fecha de 17/4/2012 se reitera la solicitud sin que tampoco se reciba respuesta.

Como consecuencia de lo anterior, se realizan una serie de gestiones telefónicas que dan lugar a contactar con D. **B.B.B.**, representante de la sociedad **PROPON COCHERAS 2000, S.L.** actual propietaria de las plazas de garaje donde se ubican las cámaras denunciadas y quien remite una serie de correos electrónicos con información y documentación de la que se desprende lo siguiente:

- El denunciante, D. **A.A.A.**, dispone de tres plazas de aparcamiento en la **(C/.....1) de GRANADA** en concreto en el nivel -2.
- En esa misma planta, D^a **C.C.C.** dispone de otras cinco plazas de garaje.
- El resto de la planta que alberga unas 50 plazas de garaje adicionales pertenecen a la sociedad **PROPON COCHERAS 2000, S.L.**, empresa a las que las personas señaladas por el denunciante como denunciados, transmitieron la propiedad en su día antes de su fallecimiento.
- La propiedad de **PROPON COCHERAS 2000, S.L.** figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Granada como **"GARAGE DESTINADO A USO PÚBLICO con servicios de parking, lavado de coches y toda**

clase de servicios relacionados con el automóvil” ostentando la citada sociedad el pleno dominio sobre la citada propiedad según consta en la nota simple adjuntada del Registro de la Propiedad de Granada.

- **PROPON COCHERAS 2000, S.L.** ha instalado un sistema de videovigilancia al objeto de cubrir la seguridad de su propiedad. En este sentido aporta precisamente copia de una sentencia dictada por el Juzgado nº 9 de Granada y ratificada por la Audiencia Provincial de Granada, contra el denunciante de las presentes actuaciones por un delito de faltas de coacciones al estacionar un vehículo en una de las plazas de **PROPON COCHERAS 2000, S.L.**
- El sistema de videovigilancia está formado por 6 cámaras fijas y sin zoom que cubren parte de las plazas de garaje del denunciado y de D^a **C.C.C.**, persona que ha manifestado su consentimiento a la instalación del mencionado sistema.

Aportan copia del acta de la junta general ordinaria de la comunidad de propietarios de fecha 5/2/2009 en la que se recoge *“En cuanto al interés mostrado por algún propietario en instalar cámaras de televisión por su cuenta, en zonas determinadas, la Junta, en su caso, no se opondrá a ello, si bien sí quiere dejar constancia que dichas instalaciones deben estar totalmente legalizadas (LEY ORGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS), y advertir que, en todo caso, siempre serán responsabilidad de su promotor”.*

Aportan plano de los lugares donde se ubican las cámaras citadas y donde se reflejan las plazas del denunciante D. **A.A.A.**. Aporta fotografías de las imágenes obtenidas por cada una de las cámaras a través del monitor del sistema. En este sentido el representante de **PROPON COCHERAS 2000, S.L.** señala que *“ninguna de las cámaras recoge las plazas de D. A.A.A., ni tampoco el trayecto de sus coches para entrar o salir de las mismas. Sólo si D. A.A.A. coge o se baja en los ascensores del garaje de PROPON COCHERAS 2000, S.L. que tiene la naturaleza de público en sus escrituras,...podrían captarlo las cámaras. D. A.A.A. tiene también ascensores en la planta inmediatamente superior e inferior sino quiere ser captado por las cámaras”.*

- Respecto de la información facilitada a terceros sobre la existencia del sistema de videovigilancia, manifiestan que se han dispuesto una serie de carteles situados en la planta -2 del parking. Aportan fotografía de uno de los carteles. Respecto de su contenido, informan de que la zona se encuentra sujeta a videovigilancia, hace referencia a la LOPD e identifica al responsable recogiendo la dirección para el ejercicio de los derechos.
- Respecto del formulario informativo que debe estar a disposición de los ciudadanos según se recoge en el artículo 3.b de la Instrucción 1/2006 y del procedimiento establecido para distribuir los formularios ante una petición del mismo, aportan copia del formulario. Respecto de su contenido, informa de la finalidad del tratamiento de videovigilancia, el destinatario de los datos, la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición y el responsable del tratamiento y su dirección para el ejercicio de los derechos.
- No existe conexión con Central Receptora de Alarmas:
- No tienen instaladas cámaras en el exterior.



- Respecto de las personas que pueden acceder al sistema de videovigilancia instalado, manifiestan que únicamente él, como representante de PROPIÓN COCHERAS 2000, S.L. y la empresa que instaló y mantiene el sistema disponen de acceso a las imágenes.
- Las cámaras graban imágenes en un disco duro donde se mantienen por un periodo de quince días. El código de inscripción del fichero VIDEOVIGILANCIA en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos es el *****COD.1**.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

Con carácter previo procede situar la materia de videovigilancia en su contexto normativo.

Así, el artículo 1 de la LOPD dispone: *“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”*

En cuanto al ámbito de aplicación de la LOPD, el artículo 2.1 de la misma señala: *“La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”*, definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del artículo 3 de la LOPD, como *“Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*.

El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el tratamiento de datos como aquellas *“operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”*.

El artículo 5.1. f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: *“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*.

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las



Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal *“toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”*. Asimismo, el Considerando 26 de esta Directiva se refiere a esta cuestión señalando que, para determinar si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de los medios que puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para identificar a aquélla.

La Exposición de Motivos de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de esta Agencia Española de Protección de Datos, relativa al tratamiento de los datos con fines de videovigilancia señala que: *“La seguridad y la vigilancia, elementos presentes en la sociedad actual, no son incompatibles con el derecho fundamental a la protección de la imagen como dato personal, lo que en consecuencia exige respetar la normativa existente en materia de protección de datos, para de esta manera mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático”*. Sigue señalando: *“Las imágenes se consideran un dato de carácter personal, en virtud de los establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999...”*.

La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación.

Por su parte, la citada Instrucción 1/2006, dispone en su artículo 1.1 lo siguiente:

“1. La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras.

El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.

Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los tratamientos a los que se refiere la presente instrucción, sin que ello requiera plazos o actividades desproporcionados.

Las referencias contenidas en esta Instrucción a videocámaras y cámaras se entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita los tratamientos previstos en la misma.” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

La Instrucción 1/2006 en su artículo 2 establece lo siguiente:

“1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.



2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia.”

De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o identificable, por lo que la imagen de una persona física identificada o identificable constituye un dato de carácter personal.

De acuerdo con los preceptos transcritos, la cámara reproduce la imagen de los afectados por este tipo de tratamientos y, a efectos de la LOPD, la imagen de una persona constituye un dato de carácter personal, toda vez que la información que capta concierne a personas que las hacen identificadas o identificables y suministra información sobre la imagen personal de éstas, el lugar de su captación y la actividad desarrollada por el individuo al que la imagen se refiere.

III

En el presente expediente, la denuncia se refiere a la instalación de un sistema de videovigilancia en el interior del garaje situado en la **(C/.....2) DE GRANADA**, en el que el denunciante es propietario de tres plazas de garajes, que podría vulnerar la normativa de protección de datos.

En el caso que nos ocupa, el denunciante dispone de tres plazas de aparcamiento en el nivel 2 del citado aparcamiento. En esa misma planta D^a. **C.C.C.** dispone de otras cinco plazas de garaje. El resto de la planta que alberga unas 50 plazas de garaje adicionales pertenecen a la sociedad **PROPON COCHERAS 2000, S.L.**, entidad a la que las personas señaladas por el denunciante como denunciados le transmitieron la propiedad en su día, antes de su fallecimiento.

Asimismo, la propiedad de **PROPON COCHERAS 2000, S.L.** figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Granada como “*GARAGE DESTINADO A USO PÚBLICO con servicios de parking, lavado de coches y toda clase de servicios relacionados con el automóvil*” ostentando la citada sociedad el pleno dominio sobre su propiedad, según consta en la nota simple adjuntada del Registro de la Propiedad de Granada. Pues bien, la entidad denunciada tiene instalado un sistema de videovigilancia compuesto por 6 cámaras fijas y sin zoom que cubren parte de las plazas de garaje de las que es propietario y de las de D^a. **C.C.C.**, persona que ha manifestado su consentimiento a la instalación del mencionado sistema. La finalidad de las cámaras es la seguridad de su propiedad. Las citadas cámaras fueron autorizadas su instalación, en el Acta de la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Propietarios de fecha 5 de febrero de 2009, en cuyo punto Séptimo se recoge: (...) “*En cuanto al interés mostrado por algún propietario en instalar cámaras de televisión por su cuenta, en zonas determinadas, la Junta, en su caso, no se opondrá a ello, si bien sí quiere dejar constancia que dichas instalaciones deben estar totalmente legalizadas (LEY ORGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS), y advertir que, en todo caso, siempre serán responsabilidad de su promotor*”.

Por lo tanto en la citada Junta de Propietarios se daba autorización a los



propietarios de las plazas de garajes a instalar por su cuenta videocámaras en determinadas zonas si bien éstas debían cumplir todos los requisitos recogidos en la LOPD. Así la entidad denunciada instaló 6 cámaras fijas y sin zoom orientadas a las plazas de su propiedad y a las de D^a **C.C.C.**, de la que tienen consentimiento. En prueba de sus manifestaciones, la entidad denunciada aporta planos de los lugares donde se encuentran instaladas las 6 cámaras denunciadas y ubicación en el plano de las plazas del denunciante, así como fotografías de las imágenes captadas por cada unas de ellas sobre el monitor del sistema. En este sentido el representante de **PROPON COCHERAS 2000, S.L.** señala que *“ninguna de las cámaras recoge las plazas de D. A.A.A., ni tampoco el trayecto de sus coches para entrar o salir de las mismas. Sólo si D. A.A.A. coge o se baja en los ascensores del garaje de PROPON COCHERAS 2000, S.L. que tiene la naturaleza de público en sus escrituras,...podrían captarlo las cámaras. D. A.A.A. tiene también ascensores en la planta inmediatamente superior e inferior sino quiere ser captado por las cámaras”*.

Por lo tanto, a la vista de lo expuesto, las cámaras instaladas por la entidad denunciada, captarían imágenes de la propiedad de la entidad denunciada sin alcanzar a las plazas de garaje propiedad del denunciado, habiendo la Comunidad de Propietarios en el Acta de la Comunidad de fecha 5 de febrero de 2009, autorizado a que los propietarios puedan instalar cámaras por su cuenta, siempre que la instalación cumpla con la LOPD. Por lo tanto procede analizar si el citado sistema cumple con el deber de información e inscripción de ficheros recogidos en la LOPD.

Así, el tratamiento de las imágenes por parte del responsable, obliga a que se cumpla con el deber de informar a los afectados, en los términos establecidos en el artículo 5.1 de la LOPD el cual reza lo siguiente:

“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

En cuanto al modo en que hay de facilitarse la información recogida en el artículo 5 de la LOPD, debe tenerse en cuenta el artículo 3 de la Instrucción 1/2006, que establece lo siguiente:

“Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A tal fin deberán:

a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y



b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el Anexo de esta Instrucción.”

“ANEXO-

1. El distintivo informativo a que se refiere el artículo 3.a) de la presente Instrucción deberá de incluir una referencia a la «LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS», incluirá una mención a la finalidad para la que se tratan los datos («ZONA VIDEOVIGILADA»), y una mención expresa a la identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.”

Tal obligación no concurre en el caso de captaciones de espacios domésticos, no obstante, se ha aportado por la entidad denunciada fotografía de la existencia de cartel informativo de zona videovigilada instalado en el aparcamiento. Dicho cartel es acorde al que hace referencia el citado artículo 3.a) de la Instrucción 1/2006, en relación al artículo 5 de la LOPD. Asimismo, se aporta por la entidad denunciada, modelo de clausula informativa a disposición de los interesados, de conformidad con el artículo 3. b) de la citada Instrucción 1/2006.

Por otro lado, respecto al cumplimiento de la inscripción de ficheros, el artículo 26.1 de la LOPD, recoge lo siguiente:

“1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos”

El responsable del fichero es el titular del fichero que contiene datos de carácter personal. Sobre él van a recaer las obligaciones que establece la LOPD. . El responsable del fichero, antes de disponerse a someter datos personales a tratamiento, deberá cumplir con los requisitos de la normativa de protección de datos, teniendo en cuenta su naturaleza y la naturaleza de los datos que va a someter a tratamiento.

El apartado d) del artículo 3 de la LOPD define al responsable del fichero o tratamiento como aquella persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. El artículo 43 de la LOPD sujeta a su régimen sancionador precisamente al responsable del fichero o tratamiento.

El reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por RD 1720/2007, de 21 de diciembre, complementa esta definición en el apartado q) del artículo 5, en el que señala lo siguiente:

“q) Responsable del fichero o del tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que solo o conjuntamente con otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase materialmente.

Podrán ser también responsables del fichero o del tratamiento los entes sin

personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados”.

El responsable del fichero es, en suma, quien debe garantizar el derecho fundamental de protección de datos personales de todas las personas cuyos datos almacena. Por ello, va a estar obligado a llevar a cabo una serie de actuaciones dirigidas a la protección de los datos, a su integridad y a su seguridad.

Es responsable del fichero aquel que decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento derivado de las imágenes, requisitos necesarios para considerarse responsable del fichero, al amparo del artículo 3 d) de la LOPD.

El responsable debe notificar su fichero a la Agencia Española de Protección de Datos, que dispondrá inscribirlo en el Registro General de Protección de Datos. La notificación de inscripción del fichero facilitará que terceros puedan conocer que se está produciendo un tratamiento con una finalidad determinada y los afectados tendrán la oportunidad de ejercitar sus derechos ante el responsable.

Además este es el criterio que se hace constar en la Instrucción 1/2006 , al señalar en su artículo 7 que *“1-La persona o entidad que prevea la creación de ficheros de videovigilancia deberá notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma.*

Tratándose de ficheros de titularidad pública deberá estarse a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

2.-A estos efectos, no se considerará fichero el tratamiento consistente exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real.”

Así las cosas, la obligación de inscribir el fichero, no procede en el caso de que se trate de ficheros domésticos.

En el caso que nos ocupa, consta la inscripción por parte de **PROPON COCHERAS 2000, S.L.**, del fichero denominado “Videovigilancia”, en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la videovigilancia.

Asimismo, el disco duro que posee el grabador tiene una duración media de 15 días, de conformidad con el artículo 6 de la citada Instrucción 1/2006, que recoge: *“Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación”.*

Una vez analizado el deber de información e inscripción de fichero, procede analizar el apartado 1 y 2 del artículo 6 de la LOPD, que disponen:

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación comercial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su



tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes, la respuesta se encuentra en el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, que establece que: “1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia”.

Así, hasta la entrada en vigor, el pasado 27 de diciembre de 2009, de la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y sus ejercicio (conocida como “Ley Ómnibus”), la legitimación del tratamiento de los datos de carácter personal en materia de videovigilancia, a excepción de los casos, prácticamente imposibles dada su dificultad práctica, en los que se hubiera obtenido el consentimiento inequívoco de cada una de las personas que resulten captadas o grabadas como consecuencia del uso de las cámaras, puede proceder, en función del ámbito de aplicación, bien de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (en adelante LSP), o bien de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

Así hasta la entrada en vigor de la citada Ley 25/2009, la legitimación para el tratamiento la legitimación para el tratamiento por particulares y empresas de imágenes captadas a través de dispositivos de videovigilancia sólo era posible en caso de que dichos sistemas hubieran sido contratados con empresas de seguridad privada, debidamente acreditadas ante el Ministerio del Interior, al que además debía notificarse el contrato que se hubiese celebrado, conforme a lo exigido por la Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada.

La Ley 25/2009 ha suprimido para la mayor parte de los casos estas exigencias, al liberalizar la comercialización, entrega, instalación y mantenimiento de estos dispositivos, de forma que ya no será necesario acudir para su puesta en funcionamiento a una empresa de seguridad privada ni cumplir las obligaciones de notificación del contrato al Ministerio del Interior..

En concreto el artículo 14 de la nueva Ley modifica el artículo 5.1 e) de la Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada, añadiendo una Disposición Adicional Sexta a la Ley de Seguridad Privada con la siguiente redacción:

“Disposición Adicional Sexta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad:

Los prestadores de servicios y las filiales de empresas de seguridad que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidas de la legislación de seguridad privada, siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación.”



La interpretación de la mencionada disposición determina que cualquier particular o empresa cuya actividad no sea la propia de una empresa de seguridad privada podrá, “vender, entregar, instalar y mantener equipos técnicos de seguridad” sin necesidad de cumplir las exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada para tales empresas. De este modo, dado que la Ley permite la instalación y mantenimiento de dichos equipos por empresas distintas a las de seguridad privada, legitima a quienes adquieran de estos dispositivos para tratar los datos personales derivado de la captación de las imágenes sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, siendo dicho tratamiento conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

No obstante, la instalación de un sistema de videovigilancia conectado a una central de alarma, que no es el caso que nos ocupa, sí seguirá requiriendo la concurrencia de los requisitos exigidos hasta ahora; esto es, que el dispositivo sea contratado, instalado y mantenido por una empresa de seguridad privada autorizada por el Ministerio del Interior y que el contrato sea notificado a dicho Departamento.

En todo caso, el tratamiento de las imágenes deberá cumplir los restantes requisitos exigibles en materia de protección de datos de Carácter Personal, recogidos en la Ley Orgánica y, en particular, en la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, como son, entre otros, los relativos a que las imágenes que se capten sean las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida; el deber de informar a los interesados, tanto a través de la colocación de carteles informativos como mediante la puesta a disposición de aquéllos de impresos en que se detalle la información; la notificación de la existencia de los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos; o la implantación de medidas de seguridad.

Por lo tanto tras la aplicación de la Ley 25/2009, no se requeriría que los dispositivos de videovigilancia hayan sido instalados por una empresa de seguridad autorizada, siempre que los mismos no estén conectados a una central de alarmas (como es el caso que nos ocupa), pudiendo tratar los datos personales derivado de la captación de las imágenes resultantes, siendo dicho tratamiento conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, siempre que se cumplan el resto de requisitos exigidos en materia de protección de datos enumerados “ut supra”.

A la vista de todo lo expuesto, no se aprecia vulneración a la actual normativa en materia de protección de datos, por lo que se procede al archivo del presente expediente de actuaciones previas

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. **PROCEDER AL ARCHIVO** de las presentes actuaciones.
2. **NOTIFICAR** la presente Resolución a **PROPON COCHERAS 2000, S.L.** y a D. **A.A.A.**

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en



la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.